

Idiotas útiles

Aquí no ha habido muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia

MARIA MCFARLAND SÁNCHEZ-MORENO
Planeta, Bogotá, 2018, 405 pp., il.

ANTE EL anuncio de nuestra inminente visita a la exposición del fotógrafo de guerra Jesús Abad Colorado, un viejo conocido de mi acompañante, militante de izquierda, sonrió condescendiente y le preguntó si esperaba ver allí algo que no hubiéramos visto antes hasta la saciedad.

Conozco a este hombre, pensé, excluida de la conversación. Lee los periódicos y tiene fuentes que complementan o contradicen los periódicos. Está bien informado. Sabe qué está pasando. Y está bien dispuesto a explicárnoslo. Este hombre y los que son como él, profundamente inmersos en la realidad, saben que la vida es una larga serie de problemas que los más realistas e inteligentes pueden resolver mientras que los más idealistas y tontos se ahogan. Los realistas llegan al otro lado. Los idealistas se detienen en el camino, hacen preguntas, tienen dudas y se conmueven con la belleza y el horror del mundo que los rodea. Los realistas le dicen a uno que así son las cosas, y deje estar.

Cuando empecé a leer el libro de Maria McFarland me acordé de él: “Si este país supiera toda la verdad...”. Ah. Ya leí este libro, pensé. No quiero leerlo otra vez. El anuncio de contraportada de Jon Lee Anderson me desanimó aún más: “El importante y fascinante registro de cómo tres individuos arriesgaron heroicamente sus vidas para luchar contra el terror y la corrupción [...]”. Me gustan los héroes como a la que más, pero no creo en los caminos apuntalados con cadáveres heroicos que nos permiten llegar al otro lado.

Y sin embargo, superadas las seis abominables páginas del prólogo, ya no pude dejar de leer.

La narración de McFarland empieza con los sospechosos de siempre: Gaitán, el Frente Nacional, las FARC. Pausa. La guerra fría (aunque en ese momento la llamada al orden que Estados Unidos hizo a sus satélites se sintió en Colombia como un paréntesis), la

escalada de la violencia guerrillera (vacunas, secuestros, asesinatos), la respuesta de las fuerzas de seguridad colombianas. Pausa. Aparición de grupos paramilitares al servicio del Ejército o de “las milicias armadas que trabajaban para ricos terratenientes o los señores de la droga” (estos últimos ya se habían robado la película, claro). Pausa. Tratado de paz con las FARC, surgimiento de la UP, asesinato sistemático de los políticos de la UP. No más pausas.

En 1985 teníamos a todos los actores en escena, y la masacre de la UP señaló el camino a seguir: “Cualquiera que no estuviera de acuerdo era un enemigo que debía ser destruido”.

La primera parte de *Aquí no ha habido muertos*, tejida alrededor del abogado y activista antioqueño Jesús María Valle, empieza en forma con el asesinato de Héctor Abad Gómez en 1987 y termina con el asesinato de Valle. En el camino caen prácticamente todos los miembros del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, “una agrupación voluntaria de abogados, doctores, académicos”. La mayoría eran liberales o conservadores, pero estas filiaciones políticas ya iban de salida: es sorprendente cuán decimonónicas suenan ahora y cuán insignificantes eran realmente en ese momento en el cual Valle escribía cartas a la Gobernación de Antioquia alertando sobre la situación en Ituango: “Numerosas personas han sido asesinadas o desaparecidas sin que intervenga [...] ningún organismo de control oficial”.

En primera plana aparece la asamblea constituyente y la nueva constitución; en el telón de fondo, el asesinato selectivo de activistas (¿les suena conocido?) es reemplazado por asesinatos masivos de campesinos y campesinas, tenderos, maestras, choferes de bus. Empiezan a aparecer en la conversación palabras y expresiones que acabarán imponiéndose en el discurso del conmigo-o-contra-mí: al lado de los paramilitares y de las autodefensas se establecen las Convivir, graciosamente legalizadas durante el gobierno de Ernesto Samper, y los activistas se convierten en “idiotas útiles” (en el mejor de los casos) o “enemigos de las Fuerzas Armadas”.

El clímax de la sección es la masacre del corregimiento de El Aro, Antioquia, y McFarland enumera los

hechos (los que se supieron entonces y los que se supieron después): los paramilitares estuvieron en el pueblo durante una semana. Los comandantes militares de alto rango “los asistieron y ayudaron a planear la masacre”. El control de la región era importante porque “se encontraba en medio de un corredor estratégico para el transporte de cocaína”.

En 1998, cuando la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín, a cargo de Iván Velásquez, empezó la investigación de las masacres, Colombia era un país en guerra, silenciado por el miedo, la corrupción y la falta de interés.

El miedo, lo sabemos, se impuso con acciones como el asesinato, ese mismo año, de Jesús Valle, el “loquito ese que está haciendo todas esas acusaciones”, según lo expresó el empresario Pedro Juan Moreno. Durante la masacre de El Aro, nos recuerda McFarland, Moreno era secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia.

En la segunda parte de su investigación hay una descripción minuciosa del funcionamiento de la “corrupción”, esa otra palabra que el gobierno impuso en la conversación nacional a comienzos del siglo XXI, contraponiéndola a “transparencia”: los reflectores oficiales iluminaron a los funcionarios públicos que sisan en las vueltas del mercado, a los contratistas que no pagan a tiempo la salud, a los que roban en la construcción de obras públicas. En el opaco telón de fondo, los empresarios sagaces y exitosos siguieron enriqueciéndose porque son empresarios sagaces y exitosos que lo único que necesitan es que los dejen trabajar tranquilos en la construcción de “una nueva Colombia, en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad” (como lo establece el pacto de Ralito). En la versión de la corrupción que prefirió iluminar el gobierno, la plata mal habida compra casitas en Tocaima y una flota de taxis. La otra corrupción, la que practicaba (y seguramente sigue practicando) este “nuevo proyecto militar, social y económico” (en palabras de Gustavo Petro), buscaba el deterioro, la podredumbre y desintegración de las instituciones para poder “refundar la patria” y establecer “un nuevo pacto social” (pacto de Ralito). Entre los que sisan para pagar la última cuota del

HISTORIA		RESEÑAS
<p>apartamento y los que se enriquecen de verdad, nació el reguero de muertos que es la nueva Colombia.</p> <p>Esta segunda parte tiene un final relativamente feliz: Iván Velásquez no muere sino que es despedido como director regional de Fiscalías; en 2001, el nuevo fiscal, Luis Camilo Osorio, “empezó a purgar la oficina de los fiscales que habían estado involucrados en casos importantes en contra de paramilitares”; en mayo de 2000, Velásquez se va a vivir a Bogotá y se emplea como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>En la tercera parte, McFarland se concentra —a través del trabajo del periodista Ricardo Calderón— en la investigación sobre el dominio ejercido por los paramilitares en la política colombiana. Esta investigación surgió por petición de Clara López a partir de las declaraciones de Salvatore Mancuso, quien en 2002 aseguró que “los paramilitares habían superado su meta de ganar el 35% de los asientos en el Congreso”.</p> <p>Ese año fue elegido presidente Álvaro Uribe Vélez, gracias en parte a Ernesto Samper y Andrés Pastrana, que entre 1994 y 2002 trabajaron duramente en favor de la desintegración de la institucionalidad nacional. En ese momento “las masacres paramilitares se habían vuelto un lugar común” y las FARC y el ELN “utilizaban tácticas cada vez más despiadadas”. Había mucha plata para la guerra gracias al narcotráfico, digo yo, porque McFarland se cuida de las afirmaciones aventureras y no dice nada que no pueda probar.</p> <p>En particular el proceso de paz de Pastrana fue fundamental para la construcción del discurso y la estrategia uribistas, que ya Luis Camilo Osorio había dejado claros en 2001 al denunciar la negligencia en la investigación de los casos contra las guerrillas y la exagerada atención en los paramilitares. Los años que siguieron hablan del éxito en la corrección de esta “distorsión” en la narrativa pública: la campaña en contra de las FARC minó sistemáticamente su postura como combatientes políticos y paradójicamente abrió el camino para los diálogos de paz que concluyeron durante el gobierno de Santos a pesar de la oposición sistemática y feroz de su antiguo jefe.</p>	<p>En 2002 las AUC declararon un cese al fuego y en julio de 2003 llegaron a un acuerdo con el gobierno colombiano (conocido como el Acuerdo de Santa Fe de Ralito). Las palabras de Carlos Castaño, líder de las autodefensas en 2002, describen claramente la situación en el país:</p> <p>Hemos ocupado territorios donde no había guerrilla, y ganamos otros donde sí la hubo y la desplazamos un poco, pero no la hemos erradicado completamente de ningún departamento del norte y centro de Colombia, que reivindicamos públicamente bajo nuestro control, y preferimos irnos a montar grupos a otras zonas del sur del país, no en búsqueda precisamente del enemigo, sino de la coca, y falsamente nos hacemos a la idea de que estamos creciendo y lo pregonamos; mentiras, está creciendo el narcotráfico disfrazado de autodefensa.</p> <p>El episodio del cese al fuego de las AUC concluyó en 2008 con la extradición de los líderes de los paramilitares, decisión que McFarland conecta directamente con la investigación encabezada por Iván Velásquez que la Corte lleva a cabo desde 2005. “Al extraditar a los paramilitares, Uribe envió lejos a los testigos que podrían haber contado lo más importante de sus nexos con los políticos”.</p> <p>Pero su consecuencia más letal fue el éxito en la campaña emprendida por el gobierno para dismantelar el sistema judicial colombiano. El menosprecio de la imagen internacional de Colombia y “el esfuerzo sistemático por desacreditar al gobierno” se convirtieron en el lema de la campaña constante del entonces presidente, cuya popularidad innegable y arrasadora descansa en el poderoso discurso del conmigo-o-contra-mí con el que se inició a finales de los ochenta el despiece definitivo de la rama legislativa.</p> <p>La historia que cuenta este libro es la versión de la vida real de <i>A Cool Million</i>, la novela de Nathanael West. La tragicomedia de West narra la historia del joven y pobre Lemuel Pitkin, que emprende su camino hacia el éxito gracias a un préstamo para el cual deja empeñado su único bien y que en el trayecto del sueño americano va perdiendo pedazos de su cuerpo,</p>	<p>lo único que en realidad puede considerar suyo.</p> <p>La cuidadosa revisión de las fuentes y la narración desprejuiciada de los acontecimientos en <i>Aquí no ha habido muertos</i> tienen un único propósito evidente, que es contar la verdad, no describir fragmentos parcialmente iluminados de la realidad. McFarland reemplaza con precisión de cirujana estos fragmentos, tan claros y delimitados para los de un bando como para los del otro, por un espacio incómodo, en donde los lectores dispuestos a dejar por un momento las feroces certezas que nos permiten sobrevivir podemos tratar de entender el desarrollo de la guerra en Colombia más allá de nuestras inclinaciones ideológicas y prejuicios, de nuestra querrela personal o nuestro dolor privado.</p> <p>La insistencia en contar la historia apoyada en las acciones y decisiones de Velásquez y de Calderón en ocasiones le da a la prosa unos giros que desvirtúan la seriedad del texto, pero subrayan el aspecto ético del conflicto. Me permitió a mí sacar al menos una conclusión: cuando la guerrilla colombiana tomó la decisión de recurrir al narcotráfico para financiar sus actividades, tomó una decisión ética que cambió el curso de la guerra y torció su camino; cuando la ultraderecha colombiana resolvió crear y armar grupos de paramilitares, tomó una decisión ética que cambió el curso de la guerra y torció su camino. Cuando apoyamos vocingleramente a uno o a otro bando nos volvemos idiotas útiles, con la misma inconsistencia banal con que la guerrilla y la ultraderecha colombianas se convirtieron en idiotas útiles del narcotráfico.</p> <p>No estoy segura de que esto nos ayude a encontrar respuestas sobre el mejor camino a seguir. No estoy segura ni siquiera de que haya posibilidad de seguir. Pero el hecho de que Ricardo Calderón e Iván Velásquez sigan vivos es una especie de esperanza. También lo es el hecho de que este libro exista. En la coyuntura que estamos atravesando, el texto de McFarland es una referencia esencial. Así que, para terminar, ruego a los editores que añadan un índice temático.</p> <p style="text-align: right;">Margarita Valencia</p>